



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral

Radicación: 05001-31-05-010-2014-01047-01

Demandante: Juan Guillermo Londoño Bolívar, Gildardo Holguín,
Luis Esteban, Verónica y Juan Felipe Londoño Serna,
Jhoana Marcela y Edwin Fernando Londoño Cifuentes
representados por Zoraida Cifuentes

Demandado: Colpensiones, Ester Julieta Velásquez González, Olga
Rocío Velásquez González , David Velásquez
Echeverri y Diego Mauricio Velásquez González, como
herederos determinados de Julieta González y Antonio
Velásquez Lara y los herederos indeterminados

Asunto: Apelación auto

Procedencia: Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín

Magistrada ponente: Dra. Sandra María Rojas Manrique

Temas: Medidas Cautelares proceso ordinario laboral

Medellín, noviembre treinta (30) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide el recurso de **Apelación** interpuesto por la señora apoderada de la parte demandante en contra del auto proferido por el Juzgado Décimo Laboral del

Circuito de Medellín, el 5 de septiembre del 2022, mediante el cual se DENEGÓ la solicitud de medida cautelar en el proceso ordinario laboral instaurado por los señores JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLÍVAR, GILDARDO HOLGUÍN, LUIS ESTEBAN, VERÓNICA y JUAN FELIPE LONDOÑO SERNA, JHOANA MARCELA y EDWIN FERNANDO LONDOÑO CIFUENTES REPRESENTADOS POR ZORAIDA CIFUENTES en contra de COLPENSIONES, ESTER JULIETA VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, OLGA ROCÍO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI y DIEGO MAURICIO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, COMO HEREDEROS DETERMINADOS DE JULIETA GONZÁLEZ y ANTONIO VELÁSQUEZ LARA y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE JULIETA GONZÁLEZ.

1.- ANTECEDENTES

Los señores JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLÍVAR, GILDARDO HOLGUÍN, LUIS ESTEBAN, VERÓNICA y JUAN FELIPE LONDOÑO SERNA, JHOANA MARCELA y EDWIN FERNANDO LONDOÑO CIFUENTES REPRESENTADOS POR ZORAIDA CIFUENTES, llamaron a juicio ordinario laboral a COLPENSIONES, ESTER JULIETA VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, OLGA ROCÍO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI y DIEGO MAURICIO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, COMO HEREDEROS DETERMINADOS DE JULIETA GONZÁLEZ y ANTONIO VELÁSQUEZ LARA y A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE JULIETA GONZÁLEZ, pretendiendo se declare que entre el señor Juan Guillermo Londoño Bolívar y el señor Antonio Velásquez Lara, existió un contrato de trabajo indefinido entre el 1º de marzo de 1976, sustituido a los señores Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González, a partir del 6 de julio de 1992 y que se encuentra vigente; o que se declare la existencia del contrato entre Juan Guillermo Londoño Bolívar y Antonio Velásquez Lara, desde el 1º de marzo de 1976 al 5 de julio de 1992 y entre Juan Guillermo Londoño Bolívar y los

demandados Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González, desde el 6 de julio de 1992 a la fecha; se condene a los demandados a reconocer los aportes a la seguridad social por todo el tiempo laborado, los que deberán ser recibidos por Colpensiones; se condene a Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González a pagar al señor Juan Guillermo Londoño Bolívar las cesantías, intereses sobre las mismas y las primas de servicio, así como la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo o la indexación y la sanción por no consignación de las cesantías.

En el trámite del proceso, la procuradora judicial de los accionantes solicitó se decretara como medida cautelar, la inscripción de la demanda sobre los bienes inmuebles de propiedad de la señora Julieta González Zuluaga, que se encuentran ubicados en la carrera 80 # 45 GG-126 Medellín, con matrícula inmobiliaria No. 001-53955, de la oficina de instrumentos públicos de Medellín zona sur y el inmueble ubicado en el paraje gallinazo 009 Bello, con matrícula No. 01N7534, de la oficina de instrumentos públicos de Medellín zona norte; de manera subsidiaria, solicita se le imponga caución a la señora Julieta González Zuluaga, para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones.

En la audiencia realizada por el Juzgado el pasado 5 de septiembre del 2022, la apoderada de la parte accionante indicó que la propiedad del paraje Gallinazos ya no es de la demandada, lo que explica que están vendiendo las propiedades, por lo que insiste en la medida solicitada, más que en la caución, ello por cuanto los demandados están representados por curador y han mostrado un total desinterés por el proceso.

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, negó la medida cautelar, decisión contra la cual se interpuso el recurso de apelación.

2.- APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

La mandataria judicial de los demandantes, interpuso recurso de apelación contra la decisión, señalando que no comparte la conclusión del a quo, en el sentido que no se demostraron actos suficientes por parte de los demandados, que dieran a entender que tienden a insolventarse, dado que si se puede llegar a esta conclusión, por cuanto las propiedades que inicialmente estaban a nombre de la señora Julieta González Zuluaga, ya no son dos, sino una, esto aunado a los dichos de la parte actora, quien insiste en indicar que se están insolventando.

Continuó afirmando que probar que la parte accionada está buscando insolventarse para no cumplir con el proceso, es un imposible jurídico para la parte actora, considerando que en este caso se podría decir que hay una prueba indiciaria, de la cual se desprende que esto si está sucediendo, aportando en la diligencia, el documento en el que consta esta situación. Respecto de la apariencia de buen derecho, otro punto tratado por el a quo, considera que no puede supeditarse la medida a la etapa probatoria, porque allí es donde se va a dilucidar todo lo ocurrido.

3.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, se pronunció la apoderada de Colpensiones, solicitando se confirme la decisión adoptada en primera instancia, por cuanto no se ha demostrado que los demandados pretendan insolventarse o que se encuentra en serias dificultades para cumplir con sus obligaciones, al igual que no se ha probado la existencia de un contrato laboral, para que los mismos se hagan deudores de prestaciones sociales y aportes al sistema de la seguridad social.

4.- CONSIDERACIONES

4.1. Competencia de la Sala

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

4.2. Problemas Jurídicos

Debe la Sala determinar:

¿Si debe ordenarse la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre el bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001135955, revocando la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el 5 de septiembre de 2022?

4.3. Tesis

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, no es procedente ordenar la inscripción de la demanda sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001135955, de la cual es titular la demandada Julieta González Zuluaga, al no evidenciarse, de parte de los demandados, actos tendientes a insolventarse.

4.4. Premisas Normativas

El artículo 37 A de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 85 A al Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, buscó dar respuesta a la omisión legislativa en la regulación de las medidas cautelares aplicables en el proceso laboral, estableciendo a este respecto lo siguiente:

“Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.

“En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo. Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden.”

Las medidas cautelares, comportan una afectación al patrimonio del deudor y bajo esa connotación, son de aplicación restrictiva, más aun, tratándose de procesos ordinarios en los cuales aún no se ha declarado la certeza de la obligación a cargo del sujeto pasivo de la acción.

En este sentido las medidas cautelares en el juicio laboral, están sujetas a la previsión del canon 85A, cuya aplicación exige la existencia de pruebas que acrediten que el demandado puede insolventarse o que está en graves y serias dificultades económicas para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

Debe subrayarse que la Corte Constitucional en sentencia C043 de 2021 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social para “ampliar” el espectro de las medidas cautelares que pueden ser aplicadas en el procedimiento laboral, a las medidas innominadas, en la aplicación del test constitucional de igualdad frente a los sujetos activos del proceso civil y laboral, señalando:

“La jurisprudencia constitucional ha considerado que deben darse dos presupuestos esenciales para decretar una medida cautelar, a efectos de asegurar

su proporcionalidad y congruencia. El periculum in mora (o peligro en la demora), “tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”. Y el fumus boni iuris (o apariencia de buen derecho), que “aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal”

(...)

Bajo la anterior premisa, esta Corporación ha advertido que la labor del legislador debe ser prudente en materia de medidas cautelares, pues, por su naturaleza preventiva, es posible imponerlas a una persona que aún no ha sido vencida en juicio, pudiendo llegar a afectar su derecho de defensa y debido proceso. Lo cual plantea una tensión entre dos derechos. Por un lado, el de asegurar la efectividad de las decisiones judiciales y, por el otro, el debido proceso
(...)

En tal sentido, la Sala considera que existe otra interpretación posible de la norma acusada que permite garantizar el derecho a la igualdad de los justiciables del proceso laboral y también superar el déficit de protección evidenciado. Consiste en sostener que el art. 37A de la Ley 712 de 2001 sí admite ser complementado por remisión normativa a las normas del CGP, dado que el primero no contempla una disposición especial que proteja preventivamente los derechos reclamados en aquellos eventos donde la caución es inidónea e ineficaz. Aplicación analógica que procede únicamente respecto del artículo 590, numeral 1º, literal “c” del estatuto procesal general, es decir, de las medidas cautelares innominadas, ...

4.5. Del caso concreto

Inicialmente debe precisarse que la inscripción de la demanda sobre los bienes inmuebles sujetos a registro, fue regulada en forma específica para aquellos procesos que versen sobre el dominio o un derecho real respecto de tales bienes o cuando se trate de procesos de responsabilidad civil contractual o

extracontractual, previsión que excluye por definición el proceso ordinario laboral.

Así lo puntualizó la Corte Constitucional en la sentencia antes citada *“Por el contrario, las demás medidas previstas en el art. 590 del CGP responden a solicitudes específicas del proceso civil. Si se admitieran en el proceso laboral todas las medidas cautelares de la referida norma procesal general, implicaría que en él pudiera solicitarse la inscripción de la demanda o el embargo y secuestro de un bien, pasando por alto que el legislador habilitó estas medidas para casos particulares en lo civil, esto es, cuando se persigue el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual.”*

Conforme a lo anterior, no siendo procedente la inscripción de la demanda en los procesos ordinarios laborales, resuelve la Sala la medida subsidiaria de caución, iterando que en materia laboral las medidas cautelares requieren la evaluación de la conducta del empleador tendiente a insolventarse, como lo ha entendido, también, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia STL 2680 del 2018:

“...como lo concluyó el tribunal accionado, luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, que «La norma es clara al señalar que cuando en el juicio ordinario el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia o se encuentre en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, el juez podrá, a su consideración, imponer caución para garantizar las resultas del proceso. La solicitud de la parte demandante deviene en improcedente porque en el presente caso ni siquiera se ha dado inicio al proceso; el demandado todavía no ha comparecido a juicio, y por lo tanto, no hay manera de evaluar su conducta para determinar si procede o no la medida cautelar solicitada».

En este caso, tal y como lo explicó el a quo, no se evidencian razones que lleven a sospechar que los demandados estén realizando actividades tendientes a insolventarse para defraudar los eventuales derechos que podría tener la parte activa de la Litis, pues la transferencia del dominio de un bien que se encuentra en el comercio, por sí sola no constituye un acto defraudatorio.

Debe tenerse en cuenta además que en el proceso existe pluralidad de accionados, toda vez que se demanda a los herederos determinados e indeterminados de la señora Julieta González y como lo acepta la solicitante aún existe otro bien a nombre de la señora Julieta González.

Por las razones expuestas, el auto objeto de apelación debe ser **CONFIRMADO**

Sin costas en esta instancia.

5.- DECISION

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la decisión adoptada en la audiencia especial realizada el 5 de septiembre del 2022, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLÍVAR, GILDARDO HOLGUÍN, LUIS ESTEBAN, VERÓNICA y JUAN FELIPE LONDOÑO SERNA, JHOANA MARCELA y EDWIN FERNANDO LONDOÑO CIFUENTES REPRESENTADOS POR ZORAIDA CIFUENTES en contra de COLPENSIONES, ESTER JULIETA VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, OLGA ROCÍO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI y DIEGO MAURICIO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, COMO HEREDEROS DETERMINADOS DE JULIETA GONZÁLEZ y ANTONIO VELÁSQUEZ LARA y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE JULIETA GONZÁLEZ.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de origen, con las actuaciones cumplidas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el literal c) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Se suscribe con firma electrónica por salubridad pública
(Art. 11 Deceto 491 de 2020)


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado

El presente auto fue notificado por estado No. 217 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 01 de diciembre de 2022.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario